

Cuadernos del Sur

AÑO 12 - N° 21

Mayo de 1996

Francia: la contrarreforma liberal y la rebelión popular*

Daniel Bensaid

Huelgas tenaces y combativas en los servicios públicos, millones de manifestantes en las calles, un amplio apoyo social: el movimiento de diciembre en Francia ha sido mucho más que una huelga, una verdadera sublevación del país que trabaja y produce, que cuida y enseña. Desde hace varios años, los politólogos y los sociólogos impacientes celebraban la extinción del conflicto en el consenso y anunciaban la disolución de las clases en la masa gris de un individualismo desbordado. En adelante, los relojes vuelven a estar en hora. La lucha de clases continúa y la acción colectiva no ha desaparecido.

La irrupción popular ha comenzado sobre un fondo de exasperación, producto de una demasiado larga espera de promesas, tan inaccesibles como la línea del

horizonte. Se había querido creer en un progreso automático e irreversible y de repente se descubre, por vez primera desde hace medio siglo, que la nueva generación vivirá probablemente peor que las precedentes. Más allá de las reivindicaciones específicas y sectoriales, el rechazo masivo de este porvenir, que ha dejado de serlo, constituye el resorte fundamental del movimiento de diciembre. Enseguida se ha mostrado que los huelguistas combatían por todos y todas y que sus aspiraciones ponían sobre la mesa una alternativa de sociedad. Así su combate ha resucitado la esperanza.

El movimiento ha expresado también la pérdida de confianza en los gobiernos y en los representantes políticos, y la voluntad de contar, en primer lugar, con las propias fuerzas. Lo que se llama "crisis de representación" o "crisis de la política" traduce, en realidad, un malestar democrático. Ya no se cree en los discursos de pre-

* Tomado de *Viento Sur*, núm. 24, diciembre 1995, Barcelona.

sidentes y de ministros que hacen lo contrario de lo que habían anunciado. Ya no se sabe quien es responsable de qué y dónde se encuentran los centros de decisión reales, que han estallado entre el nivel del Estado nacional, el de la Comisión de Bruselas (y mañana, quizá, de la Banca Europea), o incluso las prerrogativas delegadas a instituciones internacionales tales como la Organización Mundial del Comercio. Si la potencia impersonal de los misteriosos "mercados financieros" se impone como una fatalidad, no hay que asombrarse de la crisis de representación y de la pérdida de sustancia democrática del espacio público.

Frente a esta sequía de la política, el movimiento social se ha hecho cargo con toda naturalidad de sus propios intereses. El contraste entre su potencia y la ausencia de alternativa política es evidente. Paradójicamente, esta ausencia de alternativa de gobierno ha ahorrado los cálculos electorales y las maniobras politiqueras que en el pasado, inhibieron tan frecuentemente las luchas.

La presentación del Plan Juppé de reforma de la protección social prendió la hoguera. El primer ministro lo ha presentado a la Asamblea Nacional como una medida de urgencia destinada a salvar, sin debate público previo, un sistema

de protección en peligro a consecuencia de un endeudamiento de 240.000 millones de francos (6 billones de pesetas) y un déficit anual de 60.000 millones de francos (1,5 billones de pesetas). Esta reforma precipitada fue presentada como la primera piedra de una política "coherente".

Un rechazo masivo

Aunque el Gobierno invocara posteriormente una falta de comunicación y una incompreensión de sus intenciones, los trabajadores han comprendido perfectamente la lógica de esta "coherencia" proclamada. En efecto, junto a medidas bastante vagas sobre la política sanitaria, la versión inicial del plan incluía tres grandes motivos de conflicto:

1. Contrariamente a los compromisos del candidato Chirac, aumenta la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y familiares (incluyendo las de los(as) pensionistas y parados(as)). Las previsiones para 1996 son elocuentes. Los asalariados contribuirían con 40.000 millones suplementarios al financiamiento del déficit de la seguridad social, mientras que las empresas lo harían solamente con 5.000 millones (de ellos, 2.500 aportados por las firmas farmacéuticas). Además, el Plan Juppé

instituía un nuevo impuesto desde 1996 para el reembolso de la deuda social (RDS) que debería afectar a todas las rentas, pero iba a pesar especialmente sobre el consumo popular. Así el plan se mostró desde el primer momento profundamente injusto.

2. El Plan incluía una modificación del régimen de pensiones con el pretexto de corregir el desequilibrio de la seguridad social de la tercera edad. Hace dos años, los sindicatos habían aceptado un acuerdo según el cual los trabajadores del sector privado deberían contar en adelante con cuarenta anualidades de actividad asalariada (en lugar de 37 y media) para tener acceso al nivel superior de pensión. El Plan Juppé pretendía generalizar esta medida a los funcionarios y a las empresas públicas y, de paso, suprimir los regímenes particulares, como el de los ferroviarios. Los conductores de trenes tienen derecho a retirarse a los 50 años, pero se olvida frecuentemente precisar que su esperanza de vida media es más de diez años inferior a la media de la población.

Pronto se mostró que la generalización de las 40 anualidades era un medida absurda respecto a la prioridad proclamada al empleo, puesto que obligaría a los asalariados incorporados más tarde a la vida laboral activa a traba-

jar hasta los 65 años o más, bloqueando así el empleo de los jóvenes. Detrás de esta irracionalidad económica, la medida significa claramente que los asalariados no podrán prácticamente alcanzar una retirada al 100% y deberán recurrir de forma creciente a fondos de pensiones y seguros privados complementarios. Acusados de defender un privilegio, los funcionarios públicos y los manifestantes han expresado su solidaridad con el sector privado reivindicando el retorno a las 37 anualidades y media para todos y todas.

3. Aunque de carácter aparentemente técnico, un tercer aspecto del Plan es acaso el más importante en la medida que significa un cambio de naturaleza del sistema de protección social instaurado en la Liberación, al final de la segunda guerra mundial. Inicialmente, la Seguridad Social fue concebida como una especie de mutual general de los asalariados, financiada con sus cotizaciones. Por eso, la ley preveía una representación "preponderante" de los sindicatos en sus organismos de gestión. Después, este sistema fue modificado (por los decretos de 1967) en el sentido de una gestión tripartita sindicatos/Estado/patronal. Pero el principio de una caja de solidaridad, en la cual los asalariados colocan su "salario diferido" para disponer de atención sanitaria y

asegurar su jubilación, con independencia de los cambios de mayoría parlamentaria o de los compromisos presupuestarios del Estado, se mantenía. Aún actualmente, la contribución a la seguridad social figura en la nómina como una "cotización" y no como un "impuesto". El Plan Juppé proyectaba la transformación progresiva de esta cotización en impuesto directamente percibido por el Estado como Contribución Social Generalizada (CSG), instituida por el Gobierno... ¡Rocard! Así, el gasto sanitario sería objeto de una decisión parlamentaria anual como cualquier otra partida presupuestaria. Aunque pudiera ser divertido ver cómo unos liberales transfieren al Estado la gestión de un presupuesto de protección social equivalente a su propio presupuesto, esta fiscalización significaría un racionamiento de los gastos de salud y un hurto puro y simple del salario indirecto de los trabajadores.

Nadie niega que sean necesarias reformas. Pero el Plan Juppé ha sido presentado como la única Reforma, con mayúsculas, posible, sin debate público previo a la altura de lo que está en juego. Así, se han invocado los 240.000 millones de deuda de la Seguridad Social (la deuda del Estado es de más de 300.000 millones) sin examinar seriamente las causas del déficit. Se

ha culpabilizado al crecimiento de los gastos sanitarios, olvidando precisar que una parte importante de su aumento se debe a las patologías físicas y psíquicas engendradas por el paro y la exclusión. En realidad, la principal razón del desequilibrio es el crecimiento del paro que priva de protección social a más de tres millones de cotizantes; a continuación, vienen la deuda del Estado y del Ministerio de Defensa Nacional con la Seguridad Social, los millones de cotizaciones no pagadas por los empresarios, las rebajas de cargas sociales consentidas a las empresas para "estimular la creación de empleos", que nunca fueron creados, las transferencias del régimen general de los asalariados hacia los regímenes particulares deficitarios (agricultores, artesanos).

También, los problemas de financiación no han sido seriamente debatidos. Es cierto que la deducción de una parte patronal de las cotizaciones sociales da ventaja a las empresas de fuerte composición orgánica de capital frente a las empresas de fuerte utilización de mano de obra. Pero sería perfectamente factible corregir esta distorsión instaurando una tasa de solidaridad social, ingresada directamente en la Seguridad Social, sobre las empresas con una fuerte tasa de IVA y sobre las rentas financieras, sin que ello suponga po-

ner en cuestión el principio original de financiación por cotizaciones.

En fin, el Plan Juppé ha sido perfectamente comprendido como una contrarreforma destructora de conquistas y relaciones sociales. Más aún, huelguistas y manifestantes han establecido rápidamente la relación entre este plan y las amenazas contra los servicios públicos ilustradas por un "contrato de plan" para los ferrocarriles que suprime líneas consideradas no rentables y sacrifica el riel a la carretera, con proyectos de privatización total o parcial del ferrocarril, las telecomunicaciones, la energía, así como una parte de la reforma hospitalaria que favorece a las clínicas privadas en detrimento de los hospitales públicos. A partir de la cuestión de la protección social, la movilización ha pasado en menos de un mes al rechazo global de la mundialización mercantil, de la ofensiva liberal y de sus efectos.

Un movimiento inédito

Los transportes públicos (nacionales y municipales) han constituido el núcleo duro y espectacular de la huelga. En otros sectores, como correos, electricidad, salud, enseñanza, administración, el movimiento ha sido más esporádico,

alternando días de huelga y manifestaciones. El movimiento estudiantil, muy desigual, no ha desempeñado un papel de primer orden. Por el contrario, la gran manifestación feminista, que tuvo más de 30.000 participantes el 25 de noviembre, fue un signo del clima social existente y un estímulo para el movimiento posterior. En fin, pese a los signos de simpatía y las iniciativas de fraternización, el sector industrial privado, bajo el miedo al paro, no ha entrado directamente en lucha. Sin embargo, ha expresado su solidaridad participando en las manifestaciones.

En efecto, esta es la segunda característica del movimiento: manifestaciones gigantescas, especialmente en las capitales de provincias, mientras que París sufría las dificultades del transporte: más de 100.000 en Marsella, 80.000 en Toulouse, 50.000 en Burdeos (ciudad de la que es alcalde Juppé), 60.000 en Rouen. En algunas ciudades medias de unos pocos miles de habitantes como Roanne, Annecy, Quiperlé, un tercio de la población total ha estado en la calle. Aunque es demasiado pronto para tomar toda la medida de este fenómeno, lo cierto es que nunca, ni en 1968, se había visto algo así. Multitudes así significan evidentemente que la movilización ha ido mucho más allá de los asalariados y ha llegado a la di-

mensión de una amplia sublevación popular, en la cual, por primera vez, se ha modificado radicalmente la relación entre la provincia y la capital.

En esta prueba de fuerzas entre dos mundos (el macrocosmos político-mediático y el pueblo) que no hablan ya el mismo lenguaje, la *opinión pública* ha apoyado mayoritariamente a los huelguistas, de comienzo a fin (pese a los problemas originados por la parálisis total de los transportes), hasta el punto de considerar legítimo el pago de los días de huelga.

Frente a esta tempestad, Juppé, inicialmente arrogante e inflexible ha tenido que retroceder. En principio, el Gobierno tuvo que conceder promesas presupuestarias al movimiento estudiantil para intentar alejarlo de los trabajadores. La cuestión de las pensiones fue disociada y enviada a la reserva. Se ha comprometido a respetar los estatus específicos, en especial el de los ferroviarios. El "contrato de plan" sobre el ferrocarril ha sido congelado. Ciertamente, todo esto podría ser revisado por poco que los trabajadores bajen la guardia. Pero en cualquier caso, los huelguistas y manifestantes gustan no el sabor de la derrota, sino el de una casi victoria. Habrían podido obtener más aún sin una división sindical que ha dejado márgenes de maniobra al Gobierno.

Efectivamente, esta lucha masiva apenas ha hecho nacer formas de organización unitaria de base. Aunque la CGT y FO han coincidido en la calle, no ha habido frente sindical capaz de proponer unitariamente un calendario de movilización y de presentar un calendario de reivindicaciones comunes.

Sin embargo, el asunto no está terminado. A medida que la movilización se amplificaba, nuevas exigencias han emergido, sobre los salarios, las condiciones de trabajo, el empleo y la flexibilidad. La *cumbre social* sobre el empleo entre Gobierno y sindicatos, convocada en condiciones dramáticas, no ha concluido en nada concreto. Juppé tiene ante sí ahora un calendario social explosivo para los próximos meses. Se ha comprometido a organizar nuevas reuniones sobre el tiempo de trabajo, el empleo de los jóvenes, la política familiar. Ahora deberá precisar las modalidades de aplicación de su plan, o de lo que quede de él. La cuestión de las pensiones vuelve sobre la mesa, igual que el contrato de plan sobre los ferrocarriles y, sobre todo, el proyecto de privatización de France-Telecom prevista en primavera. En un contexto de recesión, el camino es muy exiguo entre la reducción de los déficits, que estrangula el consumo, y las veleidades de relanza-

miento para evitar un nuevo ascenso en flecha del paro.

El muro de Maastricht

La movilización popular no ha bloqueado, en absoluto, a la sociedad sobre arcaísmos; por el contrario, está abierta al porvenir y a una dinámica de reformas inscritas en la perspectiva de una sociedad basada no en la competición de todos contra todos, sino sobre el derecho a la existencia (al empleo, a la vivienda, a la salud, a la educación) por delante del derecho de propiedad y de las finanzas. Estos dos derechos se oponen. Y ahí está el desafío decisivo, entre la contrarreforma liberal y otra alternativa de sociedad, indisociablemente nacional y europea. La prioridad a las necesidades de la mayoría contra la competencia desatada lleva, en efecto, a poner en cuestión la construcción europea tal como se está realizando, desde el Acta Unica a la moneda única.

Ciertamente, la cuestión de los déficits públicos y del endeudamiento de los Estados se plantea (incluso en los EE UU y en Japón) con o sin Maastricht. Pero la carrera desenfrenada hacia los criterios de convergencia y al calendario monetario impone las peores soluciones. La moneda no es un autómata fetiche, sino la expresión de

relaciones sociales. Construir Europa por la vía de la coerción monetaria y de la desreglamentación financiera es construirla al revés. En realidad, el recurso al imperativo categórico financiero para disciplinar las economías nacionales hace retroceder el proyecto europeo. La Europa monetaria tiende así a reducirse al club restringido de algunos países agrupados en torno al marco. Este club ni siquiera merece el nombre de Europa.

Para volver a poner la construcción europea en su sitio, hay que partir de los cimientos. Por una parte, la definición de una Europa política basada sobre criterios de subsidiariedad democráticamente debatidos y aceptados. Por otra parte, por la creación de un espacio de convergencia social europeo: una aproximación progresiva de los niveles salariales, de los derechos sociales, de la reducción concertada y coordinada del tiempo de trabajo, generadora de empleos, el desarrollo de grandes proyectos de servicios públicos de transporte, de telecomunicación, de energía, a escala continental. En efecto, la opción no es entre una Europa liberal, que está entre la espada y la pared, y un repliegue nacional-populista sin futuro. Otra Europa, democrática y social, podría obtener la legitimidad popular de la que carece cada día más la política de Maastricht.

Consecuencias sobre el panorama político y sindical

Los observadores han señalado frecuentemente que a este movimiento le faltaba una salida política. A la izquierda, el Partido Socialista, ocupado en la digestión de sus diez años de gestión leal del capital, se ha mostrado de una discreción ejemplar y se ha guardado de proponer la menor solución. Si Jospin ha quedado prácticamente invisible durante toda la duración del conflicto es porque sigue estando prisionero de un proyecto europeo y un Tratado, del cual la socialdemocracia fue, junto a los liberales moderados, el más celoso artesano. Por su parte en la derecha, no han faltado las zancadillas contra el primer ministro por parte de Balladur, de Pasqua y Seguin. Pero las proclamaciones sobre la necesidad de "otra política" suenan vacías porque no se trata solamente de otro método de gobierno por el diálogo, ni de una mejor dosificación entre austeridad y relanzamiento, sino, más bien de una inversión de prioridades sociales en contradicción directa con los criterios de convergencia. Otra política implicaría una revisión lacerante del proyecto europeo que ni la mayoría de derechas ni el Partido Socialista están dispuestos a arriesgar.

Por otra parte, se habría podido

temer que el Frente Nacional explotara este movimiento en sentido populista. Pero lo ha combatido y condenado abiertamente, esforzándose sin éxito en dirigir a los *usuarios* contra los huelguistas. Pero esto no excluye que pueda beneficiarse aún electoralmente del descrédito de la derecha parlamentaria y de la parálisis de la izquierda. En definitiva, gracias al papel jugado por la CGT, el Partido Comunista es quizás entre los grandes partidos el que ha salido mejor parado, evitando cuidadosamente toda iniciativa susceptible de abrir una crisis política latente. En estas condiciones, el terremoto social no provocará en lo inmediato una conmoción de la escena política, sino más bien de recomposiciones parciales, lentas, moleculares.

Los principales cambios se pueden prever y constatar ya en el campo sindical. Al comienzo del movimiento, los comentaristas superficiales insistían en la débil representatividad del sindicalismo francés. Con un 10% de trabajadores sindicados, los efectivos de un sindicalismo militante y minoritario están en efecto por los suelos; sin embargo, cada elección profesional confirma la representatividad de las confederaciones.

Es verosímil que las huelgas de diciembre provoquen una corriente significativa de resindicaliza-

ción, pero en cualquier caso, el panorama sindical queda desde ahora considerablemente modificado. Por una parte, la dirección confederal de la CFDT, con Nicole Notat a su frente, ha asumido abiertamente un papel rompehuelgas para imponerse como interlocutor privilegiado del Gobierno. Fuerza Obrera, que jugaba tradicionalmente ese papel de sindicalismo de colaboración, responsable y *constructivo*, se ha mostrado por el contrario *extremista*, por razones que no son necesariamente muy nobles. La reforma Juppé de la Seguridad Social rompe la hegemonía de este sindicato en la gestión de las cajas de seguro de enfermedad, de donde FO extraía una buena parte de sus recursos. La prueba de diciembre tendrá consecuencias duraderas sobre estas dos confederaciones. En la CFDT, una oposición que reagrupa especialmente a la Federación de Transportes y ciertas uniones regionales importantes, reclama un congreso extraordinario. En FO, el congreso previsto dentro de dos meses opondrá un candidato moderado a la alianza entre Marc Blondel, actual secretario general, y los militantes de la corriente "lambertista". Finalmente, es la CGT cuyo congreso se ha realizado en pleno movimiento, quien ha hecho una demostración de fuerza y ha impuesto una ima-

gen de sindicato combativo.

Sin embargo, el fenómeno quizás más importante para el porvenir reside en la afirmación de un sindicalismo autónomo (pero no corporativo); el sindicato SUD (*Solidarité, Unité, Démocratie*) constituye en correos y telecomunicaciones el mejor ejemplo. Se trata de un sindicato surgido de una exclusión de la CFDT en 1988. Muy deprisa, este sindicato independiente y democrático, animado por militantes de la izquierda revolucionaria, se ha convertido en la segunda fuerza de las telecomunicaciones, con un 30% de votos en las elecciones, siguiendo los talones a la CGT, mientras que la CFDT se derrumbaba. En el reciente movimiento, SUD ha jugado, junto con otros sindicatos autónomos (entre ellos, el de los impuestos), un papel que sobrepasa ampliamente el marco de su rama y se prepara a afrontar las amenazas de privatización de esta empresa pública rentable que es France-Telecom.

El otro acontecimiento fundamental es una inversión clara y neta de las relaciones de fuerzas en el sindicalismo de la enseñanza. Hace tres años, la dirección socialdemócrata de la Federación de la Educación Nacional (FEN: 400.000 afiliados aproximadamente) organizó una escisión por temor a quedar en minoría por el

desarrollo de corrientes próximas al PC, en especial en los institutos y los centros de formación profesional. La escisión ha hecho nacer dos federaciones, la FEN que se mantiene y la Federación Sindical Unitaria (FSU). La FEN conservaba así su hegemonía en los profesores de primaria. Pero en las luchas de diciembre, la FSU, muy movilizadora, ha marginado completamente a la FEN. Ya mayoritaria en la enseñanza media y superior, va a ser con seguridad el primer sindicato en primaria. Dado el peso específico del sindicalismo de la enseñanza, la FSU animada principalmente por militantes del PC y de izquierda revolucionaria, ha jugado un papel positivo en el movimiento para intentar agrupar el frente sindical común que hemos echado de menos.

En fin, la discreción de los políticos ha abierto un espacio a la removilización de los "intelectuales" a quienes se consideraba despolitizados e indiferentes. Se han publicado dos llamamientos claramente contradictorios. Uno, a iniciativa de la revista *Esprit*, con las firmas más relevantes de Alain Touraine, el filósofo Paul Ricoeur, y la "segunda izquierda" modernista inspirada por la Fundación Saint Simon. Desde la primera fra-

se, el objetivo era rendir homenaje al "valor de Nicole Notat" (el líder de la CFDT), sin tomar claramente posición sobre los dos temas centrales del momento: el apoyo a los huelguistas y el rechazo del Plan Juppé. El segundo llamamiento, encabezado por Pierre Bourdieu, llamaba a un apoyo activo, político y material, a los huelguistas y a sus reivindicaciones y consiguió un impacto considerable.

Los huelguistas y los manifestantes de diciembre han mostrado que era posible hacer retroceder al Gobierno, oponerse a los efectos de la globalización mercantil, poner freno a la ofensiva liberal. Este acontecimiento crea una situación nueva, en la que se anudan lo viejo y lo nuevo. La movilización popular desgarrará la línea del horizonte e inventa su propio porvenir. Esboza una alternativa a la dictadura de los mercados financieros y al reinado de una competición inhumana. Se ha especulado ya mucho sobre el significado de esta explosión social. Numerosos comentaristas quieren ver en ella la última huelga arcaica de una época que termina. ¿Y por qué no la primera gran huelga antiliberal del siglo que viene?

París, 3 de enero de 1996.